PROYECTO DE DECLARACION

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE ENTRE RIOS

DECLARA su más enérgico repudio a la ilegítima, inconstitucional, arbitraria, inequitativa e incommunicada baja de "Pensiones No Contributivas Por Invalidez" ejecutada por el Gobierno Nacional, en el marco del Decreto N° 432/97 PEN y su modif. N° 582/03 PEN reglamentario de dichas pensiones y que nunca fuera aplicado, **INSTANDO** a la inmediata regularización de dichos beneficios por afectar los derechos humanos de miles de argentinos en condiciones de vulnerabilidad.-

FUNDAMENTOS

SEÑORES DIPUTADOS:

El reconocimiento sistemático del Gobierno Nacional de “errores” en la gestión de gobierno presentado como un valor republicano ya ha superado la barrera de lo tolerable, no ha alcanzado con CEOS diseñando políticas públicas en favor de los sectores corporativos que representan, transfiriendo a los que menos tienen, inclusive a los que no tienen nada, la pesada carga de pagar el quintuplicado costo de la energía, tampoco han alcanzado las serias dificultades para controlar la inflación, las propuestas salariales por debajo de ésta, los miles de despidos, la pobreza e indigencia que continúa acelerándose; ahora las personas que cobraban una pensión no contributiva por invalidez se enteraron al ir a cobrarla que ya habían sido dados de baja.-

Un principio general del derecho administrativo como es la debida fundamentación de las decisiones de gobierno pareciera desvanecerse ante las imperiosas necesidades de contener el gasto público.-

El Gobierno Nacional desde su asunción ha aumentado la planta de personal, en especial en los cargos de mayor trascendencia institucional, se han creado ministerio, secretarías, subsecretarías, nuevos cargos y estructuras orgánicas sin una planificación estratégica que atienda los intereses de la gente, ahora, a un año y medio advierten que necesitan equilibrio fiscal y para alcanzarlo recurren a un sector supuestamente invisible, sumiso, que ante la adversidad se conforma “con lo que le toca”.-

Preocupa el grado de improvisación e insensibilidad a la vez que padece este gobierno aunque a esta altura es hora de expresarlo claramente, no son errores, es una concepción del Estado que necesita desatender las necesidades de la gente, desprendiéndose de roles que están íntimamente convencidos debe dejar de cumplir la Nación, abriendo paso a las leyes del mercado, así, según su posición ideológica, una persona con capacidades diferentes no tiene dificultades para insertarse en el mercado laboral que lo dignificará más que percibiendo una pensión.-

Se pueden dar miles de ejemplos demostrativos de la injusticia de la baja de pensiones no contributivas por invalidez, cada caso es un ser humano que sufre las dificultades que su invalidez le acarrea, ahora agravada por el retiro de los fondos para paliar en parte su problema.-

Se estima que en los últimos tres meses más de 70.000 beneficiarios que percibían la pensión no contributiva por invalidez prevista en la Ley 13.478 y sus modif., han dejado de cobrarla, para justificar la medida recurrieron al Decreto N° 432/97 PEN reglamentario del art. 9° de la ley citada, procediéndose directamente a dar de baja beneficios por entender que no reunían algunos de los requisitos que dicho decreto establecía y que a pesar de haber pasado ya veinte años de su dictado, nunca fueron exigidos a ningún beneficiario.-

Ninguna notificación les fue cursada para verificar caso por caso el universo de beneficiarios que cobran esa pensión, tampoco se emitió un acto administrativo que fundamente las razones para adoptar semejante decisión, la que notificada a los beneficiarios les permita defender sus derechos por la vía que estimen corresponder, así, simplemente la baja infundada, inconsulta, comunicada, arbitraria y discrecional, es el más absurdo mecanismo que se pudo elegir para su instrumentación.-

El marco normativo lo da la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que Argentina ha adherido allá por el año 2007 adquiriendo de esa forma rango constitucional, en ese marco, al estar reconocidos como sujetos de derecho ya no se trata ésta de una cuestión asistencial sino de un derecho que ningún funcionario público puede desconocerle sin incurrir en un obrar antijurídico.-

En el aspecto procedimental se recurre al art. 61 del Reglamento de esta H. Cámara para encuadrar el presente proyecto.-

Señores Diputados, considero que este Honorable Cuerpo no puede mantenerse insensible ante tan alarmante realidad, un sector vulnerable de nuestra sociedad lo exige, por las razones expresadas, es que pongo a consideración de mis pares el presente proyecto de declaración que pretende alertar a las autoridades nacionales de la injusticia de tan desacertada medida, repudiándola y exigiendo su inmediata revisión por así imponerle los derechos humanos de las personas con algún grado de invalidez que percibían el beneficio en cuestión.-